
HABLEMOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL

Jorge Orlando Melo
William Ramírez Tobón*

1. **La Universidad del Frente Nacional:
20 años de crisis**

La Universidad Nacional ha sufrido un conjunto de aceleradas transformaciones en el curso de los últimos treinta años que aún no se han analizado detalladamente. De una universidad pequeña, con 56 6.000 estudiantes de clase media y alta con grandes probabilidades de ascenso social, se ha pasado a una institución relativamente grande, con un estudiantado socialmente menos elitista, en buena parte de tiempo parcial, y cuyas posibilidades de adquirir un alto status social con base en el título universitario se han reducido drásticamente. Al mismo tiempo, se pasó de una universidad profesionalista, centrada en las viejas facultades liberales, a una universidad que pretende ser creadora de ciencia y cultura, centrada en los departamentos, con ambiciones investigativas. De un profesorado de tiempo parcial, usualmente compuesto por los más prestigiosos profesionales de cada área, se ha pasado a una universidad dominada por un profesorado de tiempo completo, formado en la universidad en el sentido más estricto: no sólo su título es usualmente de la Universidad Nacional, sino que su verdadera formación como docente y

científico es el resultado de una carrera universitaria prolongada, muchas veces con escaso contacto con la práctica profesional liberal.

Estos cambios se produjeron en forma paralela con una serie de transformaciones sociales del país, que resulta superfluo señalar. Pero es evidente que tales transformaciones estuvieron inscritas en un juego de tensiones y fuerzas que afectaron el funcionamiento y la orientación de la institución universitaria. Para mencionar sólo algunos aspectos muy visibles, la expansión de la participación política y social que se esbozó en el país a partir de la década del sesenta —la ampliación de clases medias con un nivel educativo más alto, el auge de la militancia sindical y campesina, etc.— tuvo una manifestación temprana y radical en la Universidad, y buena parte de las transformaciones ideológicas que ha tenido el país fueron anticipadas por los cambios en el estudiantado y en el profesorado que iniciaba su carrera en esa misma década. Así podría afirmarse, sin mucha exageración, que las bases de la ciencia social colombiana actual en sus diversas vertientes — la antropología, la sociología, la historia y la economía de orientación crítica— fueron establecidas en el ambiente ilusionado y contradictorio de los primeros años del Frente Nacional. Sin embargo, esos intentos de ampliar el escenario político y social tropezaban con las instituciones y prácticas restrictivas

* Jorge Orlando Melo, historiador; William Ramírez Tobón, sociólogo, investigadores del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional

que caracterizaron el Frente Nacional y con las extraordinarias rigideces del sistema político colombiano, en un proceso contradictorio que condujo a reforzar entre los intelectuales universitarios las posiciones radicales, la búsqueda de opciones guerrilleras y eventualmente el rechazo a toda forma de intervención en la sociedad colombiana que pudiera contribuir a aplazar la que se veía como inevitable revolución social. La radicalización estudiantil y profesoral, inicialmente ligada a un proceso de análisis y acercamiento al país, generó así formas de pensamiento y acción política y social alejadas de las condiciones reales del país. Todo este proceso condujo a enfrentar la Universidad con el Estado, y condujo a una descalificación global de las instituciones públicas de educación superior por parte del gobierno y de los dirigentes sociales y económicos del país, que se acostumbraron a verla ante todo como una generadora de problemas de orden público, interesada únicamente en formar agitadores sociales, e incapaz de preparar los dirigentes sociales, económicos y políticos que el país, en su particular visión, requería.

En esos años de agudo enfrentamiento político y cultural, los sectores dirigentes del país prefirieron entonces confiar sus esperanzas de formación de los profesionales de más alto nivel a las universidades privadas, las cuales crecieron en forma acelerada destruyendo el predominio cuantitativo de la universidad pública y, en la medida en que se configuraron algunas universidades privadas claramente orientadas a la formación de élites, afectando drásticamente la capacidad de vinculación de los egresados de las universidades públicas a las funciones más elevadas de la sociedad, tanto en el sector público como en el privado.

En este contexto, la alienación estudiantil, inicialmente configurada ante todo como un rechazo ideológico del sistema y como la búsqueda de una formación y una actividad políticas revolucionarias, se fue mezclando estrechamente con una alienación más general. Es difícil precisar los elementos que han ido conformando las formas típicas de la actitud estudiantil en las universidades públicas, pero sin duda han estado entre ellos la conciencia de que la formación profesional ofrecida no les permite competir profesionalmente con los

egresados de las universidades privadas o, incluso, que un fuerte prejuicio social y político hará muy bajas las posibilidades de un empleo satisfactorio. Además, el desarrollo político nacional y en particular la evolución de los grupos más radicales hacia formas de lucha armada afectó al estudiantado, haciendo que se privilegiaran las organizaciones puramente activistas frente a las que veían a la Universidad como un campo de formación política y cultural en un sentido más amplio.

Todo lo anterior hizo que el estudiantado perdiera solidaridad con la institución, y que para los grupos más activos pareciera indiferente la supervivencia y el funcionamiento de la entidad. Simultáneamente las diferentes orientaciones que se configuraban entre el profesorado, muchas de ellas estrechamente ligadas a formas de militancia política, hicieron imposible que se generara un consenso interno sobre la función de la Universidad. En ausencia de este consenso, la Universidad fue incapaz de ofrecer una perspectiva de autodirección que pudiera haberse impuesto, y entre 1970 y 1984 osciló entre etapas de manejo autoritario, en las que el Estado trataba de imponer "orden" mediante medidas disciplinarias, y etapas "democráticas", en las que las fuerzas internas recibían temporalmente un campo para manejar y orientar la Universidad, y que concluían usualmente en forma catastrófica, por la ausencia de un proyecto universitario capaz de obtener consenso interno y de imponerse sobre las minorías universitarias que no consideraban importante el mantenimiento de la Universidad. No fueron ajenas al estudiantado y al profesorado posiciones que veían a la Universidad como una institución inevitablemente condenada a favorecer el sistema, a servir de forma de reproducción ideológica de éste, a formar simplemente los técnicos que el capitalismo requería; por lo tanto, ayudarla a funcionar, incluso mejorarla, era contrario a los verdaderos intereses del país. Para otros, quizás menos sofisticados intelectualmente, la Universidad era únicamente un medio de reclutamiento y de protección para la militancia política, función que podía llenarse a veces mejor mientras menos existiera la llamada "normalidad académica".

Evidentemente, dentro de la institución hubo siempre un amplio núcleo de profesores con

una visión de la Universidad más positiva y creadora, que la entendían como un campo de formación de la cultura y de la ciencia en el país, como un medio en el cual se formaba entre los estudiantes una capacidad de análisis crítico riguroso, etc. El llamado movimiento de los “claustros”, estuvo en buena parte permeado por esta perspectiva, y hacia 1968-71 se formuló por parte de amplios sectores de la Universidad Nacional un proyecto universitario con un buen grado de coherencia. La misma práctica real y cotidiana de la Universidad, en muchas áreas, se siguió orientando por esta visión, y continuaron desarrollándose actividades investigativas y de formación estudiantil marcadas por la necesidad de conocer la realidad nacional, preparar profesionales con una buena conciencia del contexto económico, social y cultural de su actividad laboral y con una actitud transformadora.

Sin embargo, esta tendencia se encontraba minada por la coexistencia con algunas de las visiones señaladas y por la dificultad para abandonar cierta solidaridad gremial con quienes, a nombre de la transformación radical del país, colocaban continuamente a la Universidad en situación de parálisis o al borde del derrumbe. La crisis de los “claustros”, entre 1972 y 1974, constituye un buen ejemplo de las dificultades para el desarrollo de un proyecto de universidad crítica en un contexto nacional cada vez más inestable. Además, el auge de las estrategias guerrilleras entre los sectores enfrentados al sistema reforzó la tendencia al vanguardismo entre los activistas profesoraes y estudiantiles, lo que condujo a una fuerte división de la organización gremial del profesorado y a la desaparición casi completa del movimiento estudiantil, cuyas organizaciones fueron suplantadas por una vanguardia radicalizada que operaba como punta de choque de los grupos políticos nacionales decididos a derribar el sistema.

Ese complejo proceso de los años setenta y comienzos de los ochenta tuvo serias repercusiones sobre la marcha interna de las universidades públicas, y entre ellas la Universidad Nacional, no sólo en el más obvio y conocido sentido de las frecuentes interrupciones de la actividad docente. La calidad académica de algunas áreas fue afectada por las dificultades

para realizar un trabajo sostenido, por las condiciones a veces intolerables de tensión en que se desarrollaban la docencia o la investigación, por el retiro de muchos docentes, por la generalización de actitudes facilistas entre profesores y estudiantes, por la expansión del empleo múltiple entre los docentes, etc. A esto se sumaban las dificultades presupuestales, las carencias de recursos para el equipamiento moderno de la institución, para dar a los profesores posibilidades de formación adecuadas y para pagar salarios que hicieran menos atractivo el trabajo complementario externo. Además, estaban los cambios en la composición del estudiantado, que era menos dócil, de una formación previa más desigual, proveniente en buena parte de un sistema de enseñanza secundario que sufría una crisis igualmente profunda, y que carecía del proceso de socialización intelectual y política más o menos exigente en términos culturales que había caracterizado al movimiento estudiantil hasta comienzos de los setenta. En estas condiciones, la Universidad Pública, y entre ellas la Universidad Nacional, después del fracaso de los intentos de cogobierno de 1974-75, pareció entrar en una crisis sin salidas visibles.

2. En la era del diálogo

La agudización de las tensiones políticas del país, que llegó a nuevas alturas durante el gobierno de Turbay Ayala, y que se reflejaba en la vida universitaria, sufrió una breve pausa a partir de 1982. El período rectoral de Fernando Sánchez Torres (1982-84) está conformado por veinte meses de crisis, transcurridos según ondas desiguales en intensidad pero marcados por un singular signo: el de una sintonía pocas veces vista entre la Universidad y las condiciones políticas del país. Es el momento, en el contexto nacional, de los planteamientos de diálogo entre la subversión y el Estado impulsados por Belisario Betancur, así como de los esfuerzos abiertos y encubiertos de varias fuerzas sociales para frustrar el entendimiento. Es el momento, dentro del claustro universitario, de una decidida voluntad de diálogo por parte del equipo rectoral que trata de tender líneas de concertación con los estamentos, así como de los esfuerzos de dentro y fuera por hacer abortar dicha concertación.

El diálogo que quiso mantener el rector Sánchez Torres pretendió tener como interlocutores a todos los estamentos de la Universidad y como telón de fondo, sus reivindicaciones. Estas estuvieron siempre presentes como parte fundamental de las problemáticas sectoriales. Para los estudiantes eran las residencias, la cafetería y la organización estudiantil; para los profesores, la participación en la gestión académica; para los empleados, la organización y la mejora en sus condiciones de vida. Fue un intento de diálogo sin pruebas excluyentes de fuerza, inspirado sin duda por el novedoso y optimista experimento de concecitación en que estaba enfrascada la Presidencia de la República.

El fracaso del modelo rectoral de Sánchez Torres, que estaba dispuesto a dialogar pero no parecía tener claras las condiciones reales que requería el diálogo ni ofrecía una visión, un modelo claro de universidad, sólo puede entenderse a cabalidad si se le vincula a las muchas circunstancias y fuerzas que iban a contracorriente del esquema de tregua y paz propuesto por Belisario Betancur. Pese al empeño del rector por mantener abiertos los vasos comunicantes, éstos se verían obstruidos por la misma falta de voluntad política de sectores que a nivel nacional hacían de la paz una retórica sin contenido. Así, mientras por un lado la intolerancia y la agresividad de las fuerzas del orden exacerbaban a los estudiantes armando sus ánimos de nuevas beligerancias, por el otro, algunos grupos de extrema izquierda, con una cierta capacidad de convocatoria dentro de la Universidad, veían en el espíritu conciliador de las directivas una señal de debilidad y una oportunidad más para la preparación de combates definitivos a nivel social. Al lado de estos factores desestabilizadores una amplia población estudiantil, mayoritaria pero inorgánica, era sobrepasada por las consignas agitacionales de las minorías, sin lograr expresar sus verdaderos intereses y convirtiendo su exclusión en una creciente apatía.

Del clima de asambleas, de discusión de los problemas, de búsqueda de soluciones y cuestionamientos continuos, sólo va quedando un enfrentamiento cada vez más pugnaz entre el rector y los estudiantes, y entre el gobierno y los estudiantes. Sánchez Torres plantea la en-

trega de residencias y un cierre preventivo. Se hace efectivo el cierre preventivo de la Universidad durante quince días en los cuales se evacúan y reasignan las residencias. La Universidad se reabre en un clima de tensión agravado por el hallazgo, sin vida, de un activista estudiantil y la preparación de jornadas estudiantiles que protestan por ese hecho. El 16 de mayo, los violentos choques entre fuerza pública y estudiantes determinan el cierre indefinido de la Universidad.

3. La rectoría de Maivo Palacios

Sánchez Torres renuncia ante la posibilidad de una reapertura militarizada. El 30 de agosto de 1984 es nombrado como nuevo rector Marco Palacios quien reúne el Consejo Superior Universitario, nombra nuevos vicerrectores y propone una reestructuración administrativa. Se explicitan varios problemas fundamentales: la inseguridad en el claustro (se sugiere la creación de una policía universitaria especial), el manejo de las residencias, la reforma del bienestar universitario, y el replanteamiento de las relaciones entre la Universidad, la sociedad y el Estado. En este sentido se renuncia abiertamente a la teoría de la extraterritorialidad de la Universidad y se propone un vínculo más estrecho entre sus labores y las demandas de la sociedad y el Estado.

Poco después de la posesión de Marco Palacios, se organizan varios foros para la discusión del problema universitario. El de profesores es ampliamente representativo (asisten 600 docentes) y allí se plantean aspectos tales como el fortalecimiento de la autonomía (en un sentido diferente a la extraterritorialidad), el ofrecimiento de un sistema de bienestar integral, la necesidad de un acuerdo mínimo entre los estamentos para asegurar la normalidad y la convivencia, la necesaria descentralización de funciones que otorgue mayor capacidad decisoria a las unidades docentes, la institucionalización de mecanismos de participación profesoral, los problemas de financiamiento. El foro de estudiantes exige la apertura inmediata de la Universidad, protesta por el desalojo de residencias y el cierre de cafetería y se autoproclama, sobre la base de su incipiente organización, como interlocutor válido ante las directivas. Debe mencionarse, además, la autocrítica que

amplios sectores estudiantiles hacen de las formas anárquicas y violentas de movilización y su reconocimiento de la necesidad de propiciar un ambiente adecuado para la reapertura.

No obstante el nuevo clima de distensión y los llamados a la reflexión desde los sectores docente y estudiantil, la desconfianza y el escepticismo parecen impregnar las medidas iniciales de las directivas. La rectoría es consciente de la imposibilidad de concertación en un medio donde no hay interlocutores representativos y responsables, y donde los experimentos democráticos son manipulados por la extrema izquierda o drásticamente abortados, desde afuera, por los reflejos defensivos de una derecha que teme la institucionalización de la subversión en el claustro universitario. Más que implantar la democracia en la Universidad Nacional lo que se impone es mantenerla abierta, y ésta parece ser la tarea del momento para el nuevo equipo rectoral. La idea es que la primera condición para mejorar la calidad académica de la Universidad, para estimular la labor de los profesores y mantener un clima de trabajo, es que la Universidad funcione en forma continua.

La política universitaria del rector Palacios logró un amplio pero difuso apoyo en la comunidad universitaria. Los estudiantes podían culminar sus carreras en un tiempo razonable, sin quedar sometidos a los cierres periódicos y cada vez más frecuentes que caracterizaron la institución entre 1970 y 1984. Probablemente valoraron también un ambiente interno más amable y activo: la normalidad académica permitió cierta recuperación de las actividades culturales, tanto de las que programa la Universidad como de las que surgen y se realizan por iniciativa de los estudiantes. Publicaciones, conferencias, cine-clubes, etc., tuvieron un clima más propicio, que en algo fue utilizado por los estudiantes, y que contó con un respaldo firme de la Universidad.

Los profesores también, en su gran mayoría, aceptaron las principales decisiones adoptadas por las autoridades universitarias en el momento de transición. La actividad académica se volvía menos incierta para un profesorado que deseaba poder investigar y dar clases, sin estar sujeto al amedrentamiento, a las interrupcio-

nes académicas, a la presión continua de los activistas, etc. La continuidad académica, la reducción drástica de los conflictos de orden público, la actitud estudiantil, ofrecían un nuevo clima. Aparecían, además, algunas políticas concretas que favorecían sus condiciones de trabajo académico: las publicaciones universitarias se reanimaron, la Universidad recuperó en alguna medida el prestigio que estaba perdiendo rápidamente ante la sociedad, lo que permitió obtener nuevos recursos para investigación o programas diversos, el presupuesto fue concedido por el Estado con relativa generosidad — al menos si se compara con años anteriores y con el trato a las demás universidades públicas—. Otra vez la Universidad recibía un reconocimiento positivo, y el profesor dejaba de ser un paria, visto como cómplice de los grupos estudiantiles más perturbadores, o como un docente sin interés por la Universidad, que venía a cobrar el sueldo pero utilizaba gran parte de su tiempo trabajando en otras instituciones bogotanas.

Por supuesto, el consenso no era total, y no faltaron las voces críticas. La drástica modificación del sistema de bienestar estudiantil provocó la reacción de grupos importantes de alumnos para quienes la reapertura de residencias, emergió como importante reivindicación. Esta, no obstante, ha ido perdiendo apoyo ante el carácter inmodificable de la medida y el reconocimiento gradual de las graves anomalías que causaron el cierre del servicio habitacional para los estudiantes.

Por el lado de los profesores, después del alivio de una rectoría capaz de hacer funcionar la Universidad, capaz de tomar decisiones y de cortar algunos de los nudos gordianos que mantenían enredada a la institución, comenzó algún tiempo después un progresivo distanciamiento: la gestión rectoral empezó a calificarse de autoritaria por no tener en cuenta la posición de los profesores, en particular de sus organizaciones gremiales, y hacer caso omiso de algunos intentos estudiantiles por acreditarse como interlocutores viables. Sin embargo, pese al malestar profesoral y a sus críticas, muchas de ellas valoradoras en términos positivos de algunas de las políticas directivas, las propuestas alternativas del estamento no se hicieron presentes y tanto las impugnaciones

como los apoyos quedaron a nivel de los corretores del claustro.

Es posible, no obstante, configurar el sentido principal de las dispersas críticas del profesorado a la rectoría de Marco Palacios. Hubo, de entrada, el reconocimiento de que la voluntad de mantener la Universidad abierta logró una estabilización básica del claustro, indispensable para proyectar su funcionamiento sobre cimientos más sólidos. Pero este objetivo y sus medios de apoyo, de tipo táctico, deberían irle dando paso a planes de mediano y largo plazo, más estratégicos, que fueran sentando los fundamentos de una dinámica comunitaria apoyada en relaciones interestamentales más flexibles.

El profesorado podía reconocer que la gestión de Palacios se defendía en el resultado de mantener la Universidad abierta y en los medios empleados para lograrlo, ya que ello no habría sido posible sin una nueva dinámica de protagonismo rectoral, de libre autoridad para afectar los factores tradicionales de inercia y perturbación del orden interno. Pero, como el proceso lo fue demostrando, un mandato tan puntual como el de Palacios tuvo, por su misma casuística, que agotarse en el cumplimiento cotidiano de sus objetivos. Las políticas de emergencia, ese repentismo administrativo tan característico del estilo rectoral, podía tener sentido en el plano inmediato del tratamiento remedial, pero más allá de éste se volvían, muchas veces, obstáculo para una proyección integral de mediano y largo plazo. Se reconocía, en fin, que tal estilo de gobierno, indispensable en el momento, era incapaz de prever, por su misma inercia administrativa, sus límites de oportunidad en el tiempo hasta el punto de extenderse sobre momentos y situaciones susceptibles de manejar de otro modo. Como si el ejercicio de la autoridad y el centralismo, tan válidos para tratamientos de choque, degeneraran en autoritarismo cuando el restablecimiento del equilibrio los volviera, entonces, superfluos. Concluyendo así en la paradoja de una autoridad que por deficiencia en los autocontroles terminaba, a su pesar y contrariando sus propósitos iniciales, por convertirse en un elemento desestabilizador de la situación que siempre quiso manejar.

Más allá de todo esto es preciso reconocer que el profesorado de la Universidad Nacional es

extraordinariamente disperso y variado, compuesto en gran parte por docentes que mientras puedan dictar razonablemente su clase, no tener sobresaltos de orden público o seguridad y cobrar cumplidamente su salario, prefieren no complicarse la vida. Los años del caos dejaron sin duda otros vicios: todavía es alto el número de profesores de tiempo completo que dedican la mayoría de su esfuerzo al trabajo en otras instituciones educativas o culturales.

Por lo demás, los años del desorden no garantizaron que los nombramientos estuvieran siempre basados en una selección rigurosa: muchos docentes entraron a la institución por razones políticas o clientelistas, y hoy son un lastre para sus departamentos; o gentes que simplemente sobreviven la rutina, sin verdadera pasión por la Universidad, por la formación de los estudiantes o por el conocimiento. Por otra parte, el profesorado está cambiando en sentido demográfico: la gran restricción a los nuevos nombramientos en los últimos diez años ha mantenido relativamente constante el número de docentes, y su edad promedio debe haber aumentado. El cuerpo profesoral se hace más maduro, quizás más responsable, pero al mismo tiempo menos participante, menos entusiasta, al no recibir el estímulo de generaciones jóvenes con nuevas perspectivas. Por último, la organización profesoral tiene un respaldo débil de los docentes. Las dos agremiaciones que se disputan la vocería del claustro no encarnan proyectos universitarios bien definidos. El debilitamiento nacional de las ideologías políticas revolucionarias, la pérdida de romanticismo radical de los intelectuales, la ausencia de un proyecto político nacional capaz de atraer a los sectores que no se identifican con el sistema vigente, deben haber afectado la actitud profesoral.

En todo caso, el profesorado ha tendido a estar ausente de la orientación de la Universidad de los últimos años. Es cierto que su ausencia también ha obrado en otro sentido: si en los años setenta los grupos estudiantiles más radicales podían contar con la simpatía e incluso la cooperación de sectores profesorales, que por resistencia a aparecer como solidarios con el "sistema" se negaban a dar un rechazo muy firme a las actitudes violentas, las huelgas y las actividades desestabilizadoras de grupos estudiantiles, en los años recientes el profesorado

no da aliento ni ánimo a la agitación estudiantil. Los estudiantes, en este sentido, se quedaron solos, lo que refuerza la debilidad ideológica y política de los grupos estudiantiles radicales. La debilidad profesoral fue, pues, un factor importante en la conformación de un modelo de rectoría que logró resolver durante casi cuatro años el problema de orden público de la Universidad. Para este resultado, sin duda, contribuyeron las decisiones sobre bienestar universitario, el cambio de actitud del gobierno hacia la Universidad, que permitía un manejo menos violento de los choques tradicionales y sobre todo una táctica menos provocadora por parte de la policía, y el clima nacional de negociación con la oposición armada. De algún modo, en la perspectiva de una reincorporación en la vida política legal el uso de la Universidad como centro de choque perdía prioridad, y era razonable dar un espacio, así fuera puramente de tolerancia, a una administración universitaria que mantenía un amplio liberalismo ideológico interno.

El proyecto rectoral, además de la preocupación por mantener la Universidad funcionando, incluía una serie de transformaciones en la vida de la entidad, para ir construyendo una institución más capaz de cumplir sus funciones de formación de estudiantes y de análisis crítico de la sociedad. Se pretendía romper el llamado ghetto universitario, para fortalecer los vínculos de la institución, en una especie de "reconciliación", con la sociedad civil y con el Estado. Esto llevaba a reforzar la visión de la Universidad como centro de análisis del país, a extender las actividades de consultoría y a ampliar los esfuerzos por estimular la investigación. Los posgrados recibieron apoyo especial, y la investigación en ciencias sociales tuvo especial estímulo. Igualmente se trató de divulgar los resultados del trabajo universitario, mediante un programa acelerado de publicaciones, y se revivió la revista de la Universidad. Dentro de la idea de que era necesario acabar con la "cultura de la pobreza" dentro de la Universidad, se hicieron algunos intentos por mejorar su apariencia estética, y para estimular un ambiente de mayor actividad cultural, se impulsó la programación de conciertos, conferencias, foros, etcétera.

El proyecto de reorganización de la Universidad se extendió a diversos aspectos adminis-

trativos, aunque este aspecto, que no se trata en este trabajo, sigue siendo uno de los mayores motivos de queja y frustración del personal universitario. Además, se hicieron algunas reformas al estatuto docente, que incluían elementos como la ampliación de la posibilidad de vincular docentes que hubieran hecho su carrera por fuera de la institución, para romper el aislamiento que se atribuía a la Universidad y dentro del esfuerzo por imponer un concepto de excelencia académica. El estatuto estudiantil, bastante obsoleto, y que se pretendió modificar, quedó finalmente en suspenso. En algunas facultades se hicieron reformas curriculares menores, sin que se modificaran los rasgos esenciales de la enseñanza tradicional.

La puesta en práctica de este modelo tropezó con múltiples dificultades, y a medida que pasaba el tiempo, parecía predominar la preocupación de corto plazo por mantener abierta la Universidad, como condición central para ir avanzando lentamente en las demás direcciones. Sin embargo, ese mantenimiento de la Universidad abierta, muchas veces como resultado de esfuerzos de anticipación y maniobra hábiles, no bastaba para conservar el apoyo de los estamentos universitarios y la dirección universitaria fue perdiendo crecientemente el respaldo de docentes y estudiantes. Los profesores se sentían cada vez más alejados, y en el estudiantado se iba generalizando una actitud de apatía, mientras revivía la acción de grupos de activistas empeñados en confrontar violentamente a la fuerza pública.

El resurgimiento de un ambiente de polarización y de violencia latente se reforzaba por el deterioro del clima político nacional, ante el fracaso de los procesos de paz, la intensificación de las acciones guerrilleras y el aumento de la violencia contra campesinos y sindicalistas. En el momento de la renuncia del rector, ya evidentemente desgastado, el inestable equilibrio de la Universidad estaba al borde de la ruptura.

4. Entre la crisis y la apatía

La crisis se manifiesta, como tantas veces, en la forma de una amenaza de violencia, que lleve a la parálisis de la Universidad. Y esta violencia parece cada vez más desnuda de justifi-

cación política o ideológica. El lenguaje de algunos grupos estudiantiles no pretende siquiera ofrecer una propuesta universitaria: para ellos, se trata sobre todo de mostrar que se existe mediante la violencia o la acción pura, respaldada incluso por las armas. En este año, se han hecho intentos reiterados de generar una amplia confrontación, a partir de rituales ya ensayados: la pedrea en la cuarenta y cinco. Algunos de los grupos políticos que en los últimos años habían rechazado una política de confrontación violenta y la idea de la Universidad como campo de batalla físico contra el sistema, parecen abiertos a ella de nuevo, si juzgamos los recientes comunicados, en los que se condenan solamente aspectos formales o de oportunidad de los intentos de enfrentamiento con las fuerzas armadas. En todo caso, si el mecanismo no da resultado, la tentación es agudizarlo aún más: las armas permitirán eventualmente herir un agente de la policía, un soldado. La respuesta, previsible, rompería la apatía y el inmovilismo de "las masas". En esta lógica, finalmente, sólo un estudiante muerto "en acción" generaría quizás la movilización que no se ha logrado con el ritual de la pedrea.

Esta amenaza es en buena parte externa a la Universidad, incluso si se origina en grupos de estudiantes: no está verdaderamente en cuestión una política universitaria, un proyecto alternativo para la institución. Sin embargo, es una amenaza que por su pura existencia desplaza los problemas académicos a un segundo plano: si no se logra neutralizarla, es bien sabido, cualquier intento de reformar la Universidad, o incluso de continuar la actividad normal, quedará ahogado en el remolino de cierres, protestas y nuevos cierres. Pero el problema inmediato es que la amenaza de una ruptura, de un hecho irreversible que rompa la tregua actual, no provoca sino una débil y en parte rutinaria reacción de la comunidad universitaria. Esta parece haberse acostumbrado a que las directivas actúen por ella. Sin embargo, es difícil que una simple respuesta de las directivas logre enfrentar los problemas que se avecinan. De algún modo, el modelo relativamente exitoso del rector Palacios parece encontrar sus propias limitaciones en la inacción, la apatía, la inercia de profesores y estudiantes que tendía a generar. Estos no se sienten convocados, llamados, responsables en un esfuerzo por romper definitivamente con el modelo de la Uni-

versidad "activista". Es evidente que quienes provocan a la policía para que entre a la Universidad ponen a todos en un grave riesgo. Y es evidente que muy pocos dan respaldo a una perspectiva política que justifique la rutinaria pedrea de la 45. Y sin embargo, ¿quiénes contribuirían con un debate fuerte, con una posición firme, con un esfuerzo de convencimiento y diálogo a enfrentar esta estrategia?

Por supuesto, parte del problema es el amedrentamiento de los miembros de la Universidad. Entre las amenazas de los paramilitares, que han provocado el exilio silencioso de algunos docentes, y el amedrentamiento ante los grupos armados que comienzan a tratar de apoderarse de la Universidad, los profesores y estudiantes escogen, en buena parte, la indiferencia y el silencio. A esto se ha añadido la permanente presencia de grupos estudiantiles "lumpenizados" o vinculados al narcotráfico, y la existencia de grupos que se autodefinen como anarquistas.

5. Urgencia de un esfuerzo de participación amplia

Mantener la Universidad abierta es una meta necesaria en el corto plazo. Sólo el funcionamiento regular de la institución, con sus clases, sus trabajos de investigación, sus esfuerzos por mantenerse en contacto con la sociedad colombiana, genera un clima de trabajo e interés de los miembros de la comunidad universitaria. La Universidad cerrada no sirve a ninguno: como arena de debate ideológico, su cierre no da el triunfo a nadie y equivale a derribar el tablero de juego. Pero la Universidad no puede mantenerse abierta si no hay unas condiciones mínimas de diálogo y debate, y de seguridad y tranquilidad personal. La confrontación diaria, el uso de las armas, harían inevitable el cierre de la institución. Por ello, en la coyuntura inmediata, de nuevo adquiere vigencia el esfuerzo, la reacción automática de la administración que termina: hay que mantener la Universidad abierta.

Sin embargo, solo mantenerla abierta, enfrentar los intentos de llevarla al cierre que hagan estudiantes, grupos políticos o provocadores, no genera automáticamente una perspectiva de solución de largo plazo. Una respuesta pura-

mente preventiva y un manejo adecuado y hábil de los conflictos puede resolver situaciones coyunturales, pero no puede evitar el desgaste de la legitimidad de las autoridades universitarias, e incluso el desafío coyuntural puede ganar cada vez más fuerza. Por ello, la búsqueda esencial en este momento es la de un trabajo común, que vincule con la mayor energía posible los esfuerzos de directivas, profesores y estudiantes. En relación con los primeros, sin hacerse muchas ilusiones sobre su claridad política y su compromiso, es preciso reiniciar un diálogo que señale claramente responsabilidades y derechos a los profesores y a sus agremiaciones. Y en relación con los estudiantes, es difícil encontrar un camino para su participación activa en la orientación de la Universidad. En 1986 o la primera mitad de 1987 quizás habría sido factible estimular la constitución de formas de representación estudiantil. Después de la creciente confrontación del último año, y en un contexto nacional más polarizado, es difícil que prospere cualquier esquema de organización del estudiantado. Y sin embargo, sin una voz fuerte del estudiantado, apoyada realmente en el consenso y no en la usurpación vanguardista de la representación, resulta muy difícil sacar a la Universidad del estado actual de incertidumbre. No obstante, la destrucción de los mecanismos tradicionales de representación se vio unida durante mucho tiempo a la pérdida de actividad ideológica de los nuevos grupos para conformar un estudiantado sin muchas ilusiones políticas, sin ambiciones de participar y cuyos dirigentes preferían el mundo clandestino — y hasta encapuchado— de los pequeños grupos activistas, al esfuerzo por convocar y estimular un estudiantado amplio. A pesar de esto, en los años más recientes se advierte un renacimiento del entusiasmo cultural de algunos sectores estudiantiles, lo que puede anunciar el advenimiento de nuevas actitudes y nuevas formas de organización.

El peligro de la situación actual sería sobre todo volver a vivir los comienzos de los ochenta: el cierre periódico de la Universidad para evitar el desencadenamiento de la violencia, la ruptura consiguiente del consenso, así sea pasivo, que ha permitido cierto avance en años recientes, la división todavía más fuerte entre los profesores, y otra vez al círculo vicioso de desmoralización y desánimo.

6. Las líneas centrales de un proyecto para la Universidad Nacional

La Universidad Nacional ha defendido tradicionalmente su función como conductora y orientadora de la educación superior nacional. Esto se entendió muchas veces como un esfuerzo por tener una alta representación cuantitativa en el sistema educativo, y por desarrollar algunas funciones administrativas de coordinación y evaluación que en buena parte han quedado en manos del ICFES. En todo caso, es evidente que el cambio en el sistema de educación superior ha modificado el papel de la Universidad Nacional. Este debe concentrarse ahora en su capacidad para ejercer influencia ideológica y científica sobre el resto del país y de la educación superior, con base en la calidad de su trabajo académico y la seriedad de sus contribuciones. Por ello, un proyecto universitario que pueda involucrar al profesorado debe dar prioridad a la expansión de las funciones investigativas y críticas y al desarrollo de las formas más exigentes de docencia, como los posgrados. La presencia de la Universidad Nacional no puede centrarse en el esfuerzo por tener una población estudiantil muy elevada, o por cubrir todas las formas de preparación profesional. Debe radicar más bien en reunir a los docentes en las áreas de punta, y en cierto modo en esforzarse por preparar el profesorado de las demás universidades: los investigadores y docentes para todo el sistema de educación superior.

El desarrollo de posgrados científicos y de una actividad investigativa que los respalde es relativamente costoso y requiere una voluntad seria de la administración universitaria y un respaldo firme del gobierno. La dotación de los recursos fundamentales para la investigación — bibliotecas, laboratorios, equipos, fondos para proyectos de investigación y para especialización docente, publicaciones de libros y revistas— debe ser prioritaria en el presupuesto de la Universidad. Además, es preciso revisar los mecanismos de administración de la investigación, para que los sectores donde existen grupos de excelencia ya consolidados —y puede pensarse en ejemplos diversos en áreas como medicina o ciencias naturales— puedan obrar con mayor autonomía y menores trabas, y para que se asignen recursos iniciales ágiles a los investigadores o grupos de investigadores

con menor experiencia. La creación de un fondo de promoción de la investigación, que pueda financiar desde la elaboración de proyectos para ser presentados a instancias externas hasta programas de investigación de costo intermedio, y que puedan dar apoyos parciales a la realización de tesis de posgrado y excepcionalmente de pregrado, puede ser uno de los mecanismos más adecuados para estimular la actividad investigativa en los departamentos académicos de la Universidad y para que éstos generen, en los casos donde no existe actualmente, y en un término razonable, el nivel que les permita definir programas investigativos de mediano y largo plazo.

El desarrollo de los posgrados, en áreas centrales para el desarrollo de la ciencia y de la capacidad del país de enfrentar sus problemas más urgentes, no es contrario a un proceso de mejoramiento de la enseñanza de pregrado, ni a la apertura de nuevos programas. Sin embargo, la creación de nuevos programas de pregrado no debe obedecer ya a un proceso casual y anárquico, sino que debe responder a criterios de largo plazo, para que la Universidad se limite a aquellas áreas que resulten prioritarias en términos de la contribución al desarrollo científico o cultural del país y que refuercen la influencia de la Universidad en la sociedad colombiana, por tratarse de líneas con claras perspectivas de desarrollo, donde la necesidad de preparar personal para el país sea decisiva y donde se fortalezca el vínculo de la Universidad con la solución de los problemas colombianos.

Esto debe estar acompañado por un esfuerzo serio por modificar radicalmente el modelo pedagógico vigente en la Universidad, todavía preso en buena parte de las tradiciones enciclopedistas y profesionalistas de la primera mitad del siglo. Es necesario buscar las metodologías para realizar una enseñanza estimulante y formadora, que amplíe la capacidad de análisis y autoformación de los estudiantes, que rompa, al menos en el pregrado, con la excesiva y prematura especialización y que se preocupe menos por transmitir conocimiento — que se torna obsoleto rápidamente — que por formar capacidad de investigación y trabajo académico en los estudiantes. Dada la generalización de los posgrados, el ofrecimiento de currículos fle-

xibles, que permitan a los estudiantes obtener títulos en ciencias sociales, en humanidades, o en ciencias naturales, utilizando la oferta actual de cursos en la Universidad, podría abrir el camino a nuevas formas de diseño curricular.

Ello exige un proyecto de plazo mediano que refuerce las exigencias académicas de admisión (sin excluir, sin embargo, la apertura a grupos sociales con situaciones especiales, como los indígenas, ni unos mecanismos de selección menos mecánicos que los actuales) y amplíe las posibilidades de apoyo económico a estudiantes prometedores de los niveles sociales con mayores dificultades para su sostenimiento.

En cuanto al sector estudiantil, el estímulo vigoroso a las actividades de tipo cultural — grupos de estudio y divulgación, periódicos y revistas, organizaciones artísticas y creadoras, etc.— podría responder en parte a lo que se percibe como un evidente cambio en la mentalidad dominante de los estudiantes, para buena parte de los cuales la política, en un sentido restringido, ha perdido atractivo, mientras ganan peso los intentos de encontrar en la actividad cultural una nueva forma de incidir sobre la sociedad, de hacer también política.

